

EL *PUBLIC SERVICE MEDIA* EN LA EUROPA DE LA CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA¹

Katharine Sarikakis

University of Vienna

1. INTRODUCCIÓN; 2. LA RELEVANCIA SOCIAL DEL *PUBLIC SERVICE MEDIA*: ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?; 3. LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD EN TIEMPOS DE CRISIS; 4. ¿CÓMO SERÍA UN MUNDO SIN *PUBLIC SERVICE MEDIA*?; 5. EL *PUBLIC SERVICE MEDIA* Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN; 6. PERSPECTIVAS DE FUTURO

1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se analiza el caso de la Radiotelevisión Helénica (ERT en sus siglas en griego), emisora pública de Grecia, desde su cierre forzado en 2013 hasta su reinstalación en 2015. El análisis contextualiza este caso como parte de una problemática más amplia relativa a un proceso de debilitamiento de las funciones de los espacios públicos de comunicación, bajo las condiciones restrictivas de la crisis financiera. El análisis tiene como objetivo abordar la cuestión del «extraordinario» acontecimiento que representa el cierre de ERT como un síntoma de una forma sistémica de control de los medios en Europa, que no sólo permite, sino también facilita, la ruina de los medios de servicio público. El análisis realizado intenta valorar lo que implica para las sociedades democráticas el tener emisoras de servicio público plenamente funcionales y lo que implica —o implicaría— el ser privadas de la posibilidad de tener dichos medios, especialmente en tiempos de crisis y de una creciente necesidad de participación pública en la discusión y el diseño de soluciones favorables para el interés público.

2. LA RELEVANCIA SOCIAL DEL *PUBLIC SERVICE MEDIA*: ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Para empezar, consideremos brevemente las razones por las cuales es importante discutir el mantenimiento o desaparición del «Public Service Me-

¹ El presente texto tiene como punto de partida la transcripción de una conferencia de la autora, impartida dentro del *ComLoc 2015. XIII Congreso de Comunicación Local*, en la Universitat Jaume I, el 15 de abril de 2015 en Castellón de la Plana.

dia» (*medios de servicio público*, PSM en sus siglas en inglés) y su papel en la sociedad. Los PSM son el buque insignia de los espacios de comunicación públicos, y esto es particularmente importante cuando observamos que los principales medios son en su mayoría privados. Desde la distribución de ondas hasta el espectro digital, a Internet y a las redes sociales, las sociedades buscan satisfacer sus necesidades de comunicación en espacios gobernados por intereses privados. El hecho de que la propiedad privada sea el modelo dominante de propiedad en los medios digitales y convencionales nos hace cuestionarnos si es que dichos medios tienen la capacidad —y la disposición— para colocar el interés público por delante de los intereses privados cuando emerja un conflicto entre ambos. Dichos casos serían, por ejemplo, la cobertura de noticias de los delitos cometidos por las compañías privadas, pero también del Estado y su relación con el mercado. Además, la importancia de los espacios de comunicación controlados por el sector público radica en el mandato general de proveer, para el bien común, servicios como información y educación, para cultivar una conciencia política y fortalecer la participación democrática por parte de los ciudadanos en asuntos de interés común. Por lo tanto, los medios de comunicación públicos tienen la obligación de cumplir dichas funciones para un público que incluye a todos.

Los medios de comunicación públicos tienen un mandato de *servicio público*, al igual que los sistemas de salud, educación y defensa que se han desarrollado históricamente en Europa. Proveer las instituciones de comunicación de Europa se encuentran bajo un ataque ideológico y estructural: una reestructuración múltiple en varios niveles a través de cambios legales, estructurales y financieros, y a través del debilitamiento de estructuras y narrativas que apoyan la necesidad de los servicios públicos. En este marco, las tensiones tradicionales que han mantenido a los medios públicos atrapados entre las políticas orientadas al mercado y las políticas de servicio público (Donders y Pauwels, 2008) se encuentran reforzadas por las nuevas condiciones de crisis y las transformaciones tecnológicas de los modelos digitales y multimodales de comunicación. Esto ha llevado a reiniciar el discurso público sobre la función de las emisoras de servicio público (*Public Service Broadcasting*, PSB en sus siglas en inglés). Algunos autores han señalado la transformación necesaria de estas emisoras (PSB) en medios públicos más completos (PSM), comprometiéndose con las posibilidades de transmisión digital, enfocándose en la integración y cohesión social mediante la creación de una esfera pública inclusiva (Iosifidis, 2011) y proporcionando entretenimiento, educación y facilitando la participación (Enli, 2008).

Estos cambios fundamentales deben ser situados dentro del contexto más amplio del cambio de los medios de comunicación y la transformación

del paradigma social de las formas en que la misión de los servicios públicos y su razón de existir están siendo desafiados y debilitados. Aunque el destino de los *Public Service Media* (PSM) no parezca situarse en un estado de emergencia cuando los consideramos separadamente como organizaciones nacionales o posiblemente regionales, cuando los examinamos en su totalidad, su panorama revela una tendencia preocupante. Los PSM están enfrentando restricciones presupuestarias, con el pretexto de que las crisis financieras han llevado a medidas de austeridad y a la reorganización de las instituciones públicas. Al mismo tiempo, sin embargo, dicha reorganización implica la restricción de las actividades de los PSM, tales como su expansión y funcionamiento como plataformas digitales. Dichas características no son nuevas, pero aunadas a la crisis y a una mayor intervención de los gobiernos en las operaciones de los PSM y en particular en la generación de discursos que debilitan su razón de ser, dibuja un panorama lleno de retos. Desde un punto de vista histórico, los retos que enfrentan los PSM hoy constituyen la continuación tenaz de las políticas económicas Thatcher-Reagan de principios de los años 80. El legado de la economía neoliberal ha sido el desmantelamiento paulatino, pero también a menudo violento, de la propiedad pública y su transferencia a manos privadas. Una variedad de recursos, incluyendo las ondas y ahora el espectro digital, están siendo privatizados y por consiguiente alejándose del control y la propiedad del sector público.

3. LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD EN TIEMPOS DE CRISIS

La gobernanza de los entornos comunicativos, en términos tecnológicos, estructurales y de contenido, es estratégica en momentos cuando se implementan políticas públicas poco populares y posiblemente inconstitucionales durante un largo periodo, como en el caso de Grecia. En este sentido, los cambios en la estructura de los medios no se tratan meramente de consecuencias de la crisis, sino acciones estratégicas, no para responder a la crisis sino para manipular la opinión pública.

Los países llamados impertinentemente «PI(I)GS» («cerdos») —por sus siglas en inglés—, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, han enfrentado condiciones sociales muy duras. Douzinas (2013) se refiere específicamente a Grecia como el «*Guinea Pig*» (conejillo de indias) de un experimento social donde las condiciones de reconstrucción social en tiempos de crisis están a prueba. Se plantea que la implementación de este tipo de políticas en el resto de Europa dependerá de si se producen resistencias y levantamientos sociales en los puntos críticos de la crisis. Según Douzinas (2013), las múltiples resistencias han convertido a los ciudadanos, que son los objetos de

la experimentación, en un tema político que desafía los planes de las élites económicas y políticas.

Mientras tanto, las condiciones sociales en los países europeos van en detrimento. La media de población europea en riesgo de pobreza o exclusión social pasó del 23,5% en 2008 al 24,2% en 2011. En Grecia, este incremento fue desde el 28,1% al 31% y en España del 22,9% al 27%. Ambos países suman 15,8 millones de pobres, con una proporción de 12,4 millones de personas en España y de 3,4 millones en Grecia (Eurostat, 2012). Por otro lado, en los últimos 4 años, la tasas de suicidio han aumentado en Grecia hasta un 45% (477 casos en 2011) (Smith, 2011). En 2012, en respuesta a este incremento de suicidios, causados por un número récord de desalojos y pérdida de propiedad en las clases medias y bajas, las asociaciones bancarias españolas anunciaron que congelarían los desalojos en casos extremos (Guardian, 2013). De acuerdo con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han producido 400,000 desalojos desde el comienzo de la crisis en 2007.

El papel del Estado en los últimos cuatro años ha incluido un conjunto de funciones represivas que tratan de abarcar las demandas de los actores económicos internacionales de la «Troika» (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional). Aunque el Estado mismo se encuentra bajo la presión de —como mínimo— defender e implementar las políticas de austeridad, hay poca evidencia de recuperación. Atrapado entre las presiones políticas internacionales y las presiones sociales internas, el Estado se adapta conforme a los actores dominantes en ambas dimensiones. Por lo tanto, mientras se destruye la cohesión social debido al empobrecimiento y la destrucción de la protección social a nivel interno, la amenaza de falta de liquidez, el exilio del mercado global y las amenazas políticas constituyen un ambiente sofocante para las políticas públicas. En palabras de Jessop (2011), al referirse a las presiones de los sistemas internacionales y la necesidad de cohesión social interna, «por un lado (el Estado) debe estar involucrado activamente en la gestión del proceso de internacionalización, y por otro lado, es la única instancia política con posibilidades de prevenir la creciente separación entre la dinámica del mercado global y las condiciones para la integración institucional y la cohesión social». Se debe redefinir el papel central del Estado para convertirlo ahora en la referencia de la responsabilidad política democrática. Es precisamente en esta coyuntura en la que los medios tienen el papel más significativo, porque ellos tienen que normalizar, justificar y reforzar las medidas antipopulares y antidemocráticas enmarcadas como políticas en el contexto de una emergencia: la crisis financiera. Los medios públicos disidentes y el periodismo

disidente resultan, en este contexto, un asunto peligroso para el Estado y la constelación internacional de actores de poder.

La movilización social a través de huelgas y protestas forman parte del calendario diario en los países de la crisis. Acciones pan-europeas coordinadas se han multiplicado: educadores, maestros de escuela y jardín de infancia (Marea verde), trabajadores de salud (Marea blanca); científicos y académicos (Marea roja); servicios sociales y dependencia (Marea naranja); servicios públicos en general (Marea negra); movimientos de mujeres: la mayoría contra la violencia de género y la «Ley del aborto» (Marea morada), personal universitario, periodistas y trabajadores de la comunicación, consejos y sindicatos de trabajadores están también movilizados. Las protestas transnacionales se dieron a conocer a través de las fechas del calendario de su convocatoria: por ejemplo, 14 de noviembre (2012) o el 1 de diciembre (2013).

La disidencia social con esta forma de políticas públicas ha sido llamativa y está presente en las calles. Ha sido también notable en el establecimiento de nuevos medios de comunicación en los países golpeados por la crisis y la austeridad. Especialmente en Grecia y en España, las políticas implementadas para combatir la crisis económica han destruido el sistema de protección social del Estado para los grupos vulnerables. Las organizaciones y empresas mediáticas han sufrido algunas de las consecuencias, o debido a genuinas dificultades financieras para mantener su posición actual, o debido al uso de la situación de la crisis como una poderosa y legítima razón para cambiar las condiciones de empleo de los periodistas, reduciendo sus salarios y despidiendo personal.

Los despidos masivos han creado un clima de miedo e inestabilidad entre todos los trabajadores, pero en el caso de los periodistas y trabajadores de los medios, este miedo tiene un efecto inmediato en la calidad de la información y programación. En particular, los noticieros en Grecia llegaron a ser idénticos en sus contenidos a los discursos de las élites económicas y políticas, presentando cada vez menos crítica, análisis y contexto a las duras políticas impuestas por la «Troika». Además, el deterioro de los medios en términos de su obligación de transparencia e información objetiva ha sido evidente en todos los medios y en todo el espectro político. Incluso algunos periódicos de oposición y anti Memorando, como el del Partido Comunista en Grecia, han despedido a periodistas independientes con el pretexto de las dificultades económicas.

Desde 2009, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado sobre la caída del índice de Libertad de Expresión de la prensa europea. Su secretario general, Jean François Julliard, declaró entonces que la polarización en

Europa se podía observar en los datos: mientras algunos países mantienen su estatus, como Finlandia, Países Bajos, Alemania y Austria, otros países pierden terreno rápidamente, como Hungría (de la posición 41 en 2010 a la 74 en 2013); Grecia (desde la 65 en 2011 hasta la 83 en 2013); Italia (de la posición 75 en 2011 a la 69 en 2013) e incluso Francia (posición 43 en 2011 y 35 en 2013). Por su parte, España pasó de la posición 39 en 2012 a la 36 en 2013 y la 35 en 2014, mientras que Portugal ha ocupado las posiciones 33 (2012), 28 (2013) y 30 (2014).

Algunos de los factores que provocan esta situación se encuentran en una combinación de reformas legales drásticas. La economía política general de los medios en Europa, con fuerte dependencia respecto al gobierno y la industria, han impactado de forma negativa en el statu quo de los periodistas, y, de manera más importante, en la sociedad. Se utilizan las decisiones financieras para crear más precariedad e inseguridad dentro de la profesión.

Otra forma de impactar el trabajo de los periodistas es la interferencia informal, y en particular en las formas en las que la prensa se involucra con los intereses de los negocios privados. El llamado «triángulo del pecado», las relaciones de dependencia entre la prensa, el Estado y las empresas ha creado una tormenta perfecta para la libertad de prensa en Grecia: las noticias tendenciosas, acríicas y artificiales llenaron los boletines, presentando todas el punto de vista y los argumentos de las élites. La misión de llamar a los poderes a la rendición de cuentas dejó de verse. Uno de las pocas excepciones fue el de la Emisora de Servicio Público Helénico (ERT), que había sufrido amenazas e intentos de despido de los periodistas por sus reportes y críticas a las políticas del gobierno. En junio de 2013, estos intentos múltiples fracasaron gracias a que las tribunales del país los declararon inconstitucionales. Al mismo tiempo, se iba a realizar una licitación pública para la administración del espectro digital del país. Dada la capacidad técnica dañada, subdesarrollada y cargada de deudas del sector privado, la ERT era con certeza el proveedor de infraestructura del futuro, situación que no sería bienvenida por las grandes corporaciones de medios. Mientras la «tormenta perfecta» tomaba forma sobre la ERT, con la insatisfacción política del gobierno hacia los trabajadores de la ERT, y también con el sentir de que los periodistas de la ERT estaban cada vez más «ingobernables», la entonces coalición gobernante que lideraba el partido Nueva Democracia decidió cerrar la emisora. Las motivaciones fueron políticas por partida doble: no solamente porque los reportes de la ERT eran más completos que en cualquier otro medio, sino también porque la emisora sería la ganadora segura en la licitación pública para gestionar el proceso de digitalización y en consecuencia la infraestructura digital.

Ésta última fue otorgada días después del cierre a DIGEA, un consorcio compuesto por los cinco mayores dueños de medios del país.

4. ¿CÓMO SERÍA UN MUNDO SIN *PUBLIC SERVICE MEDIA*?

Esta pregunta fue respondida poco después del cierre forzoso y anti-constitucional de la emisora griega ERT. Más de 2.500 trabajadores fueron despedidos en una noche, violando con su despido las leyes laborales del país. Los programas fueron detenidos un par de horas después del anuncio público de la oficina de prensa del gobierno; precisamente a las 23:00h el anuncio de «Sin señal» con la pantalla en negro apareció en los tres canales locales y el canal satelital de ERT, mientras sus 19 estaciones de radio fueron silenciadas.

¿Qué significó esto para la sociedad griega? El asesinato del artista de hip-hop y activista Petros Fyssas (Killah P) a manos de los neonazis en Atenas el 18 de septiembre de 2013, provocó un *shock* y una indignación general que levantó oleadas de huelgas generales en Grecia, y manifestaciones anti-fascistas diarias en las ciudades más importantes. Durante las tres semanas que siguieron al asesinato, los principales medios griegos, caracterizados por los largos programas de noticias, se concentraron casi en exclusiva al detalle del proceso de investigación y sobre los cargos contra varios parlamentarios y otros miembros del partido Amanecer Dorado; y muchos otros procesos se dejaron fuera de las agendas comunicativas. Algunos de estos otros temas incluyen:

- La decisión del Gobierno de despedir 1.300 funcionarios en Educación Superior que provocó el colapso de la educación terciaria.
- Huelgas generales constantes en su quinta semana de duración.
- El despido de 2.300 maestros de educación primaria y secundaria.
- La ocupación de escuelas por parte de comunidades de padres, maestros y escolares.
- Huelgas y movilizaciones de profesionales sanitarios para gestionar los hospitales.
- Movilizaciones masivas a lo largo del norte de Grecia contra las minas de oro por parte de la Compañía Eldorado, que terminaron con un concierto protesta con 40.000 personas.
- Negociaciones entre los representantes de la «Troika» y el gobierno griego.

Estas son algunas de las noticias que cayeron de la agenda o a las que se prestó atención marginal en los medios nacionales y en la mayoría de la prensa. La excepción fue la antigua Emisora de Servicio Público (ERT-Elliniki Radiofonía Tileorasi) que cubrió todas estas noticias en detalle. ERT había sido cerrada el 11 de junio de 2013 por un decreto gubernamental y opera desde entonces bajo la forma «Occupy» de movilización, en un modo de autogobierno con 500 profesionales en Atenas y antiguos trabajadores de ERT en las regiones.

Esta descripción del contenido unidimensional de los medios basado en el silencio sobre las políticas públicas y la resistencia, es el resultado de un paisaje mediático dramáticamente cambiado por la crisis en Grecia. La decisión de discontinuar el sistema público de medios ha tenido múltiples efectos, en particular en las siguientes dimensiones:

- Las obligaciones legales y morales hacia los ciudadanos.
- Las obligaciones legales y morales hacia la comunidad europea e internacional a través de los compromisos contenidos en instrumentos internacionales.
- El impacto en la estructura nacional y europea del panorama de los medios.
- El impacto en la producción cultural nacional y europea, y en la diversidad cultural.
- El impacto en la creación y distribución de contenidos para las audiencias de la diáspora griega.
- Los costos de oportunidad en relación al valor público de ERT en cuanto a su capital intelectual y la generación de excedentes financieros.

En términos generales, la clausura de la ERT planteó para el sistema legal y político de Grecia y de Europa serios desafíos en términos de:

- Cumplir con las obligaciones contenidas en instrumentos nacionales e internacionales.
- Provocar pérdidas económicas a través de la pérdida de capital acumulado.
- Dañar el capital intelectual del talento y recursos humanos que se habían desarrollado en el transcurso de 75 años de operación e inversión continuas.
- Despojar a los ciudadanos griegos y europeos de una fuente de información y cultura que había demostrado su rentabilidad, su productividad y su calidad.

Los ámbitos legales que más fueron afectados en cuanto a las funciones de los medios y la misión del periodismo son: la libertad de expresión; la diversidad cultural y la colaboración; el pluralismo de los medios; la promoción de la identidad europea; y la promoción de la industria audiovisual europea. Además, la imagen del país dentro de la comunidad internacional ahora parece a la de los países con regímenes antidemocráticos con un historial de limitaciones a la libertad de expresión y violación de los derechos humanos.

La evaluación del cierre de la ERT ha producido las siguientes observaciones:

- La completa interrupción de los servicios de la ERT contraviene el espíritu de la Constitución Griega, que garantiza la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información.
- El cierre socava las obligaciones contenidas en el Artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (ECHR, 2010) de ofrecer servicios al país entero, a través de internet así como en radio y televisión.
- El cierre de la ERT entra en contradicción con la obligación nacional de proteger a las Emisoras de Servicio Público, como lo señala el Protocolo sobre el Sistema de Radiodifusión Pública del Tratado de la Comunidad Europea, el Tratado de Ámsterdam de 1997 (European Communities, 1997).
- El fin de la corporación de la ERT como la emisora de servicio público de un Estado-Nación en Europa.
- La clausura y el despido de todos los trabajadores constituye un fuerte golpe al panorama de los medios del país, afectando abrupta y severamente el pluralismo de los contenidos y las fuentes de los mismos. En la actualidad, Grecia es el único país de la Comunidad Europea sin un sistema de emisoras de servicio de público.
- El cierre de la ERT debilita seriamente la obligación del país de promover la diversidad cultural conforme a la Convención para la Diversidad Cultural de la UNESCO (2005), de la cual Grecia es parte. De acuerdo con la Convención de la UNESCO, la «diversidad cultural» se refiere a multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos

de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.

- La clausura tiene consecuencias imprevisibles y catastróficas para la preservación de los archivos de los eventos nacionales e internacionales más importantes que estaban en poder de la corporación, así como su digitalización y posterior distribución mediante plataformas abiertas al público, y su utilización por las próximas generaciones de actores culturales en Grecia y en el extranjero.
- En ese sentido, la ERT y el Estado Griego violan su contrato con la Unión Europea y otras partes en sus compromisos de permitir el acceso y uso de sus archivos por parte del público.
- La interrupción de las operaciones de la ERT ha provocado tres tipos de cargas financieras evitables, con costos no contabilizados directos e indirectos a corto y largo plazo: la generación de costos importantes con los pagos por despidos; la privación de ingresos seguros con la interrupción de subvenciones aprobadas y contratos de colaboraciones europeas, digitalizaciones y derechos de autor; y, la carga adicional de establecer una nueva empresa.

5. EL PUBLIC SERVICE MEDIA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Las reacciones a la clausura de la ERT han sido internacionalmente fuertes y notables. Un estudio encargado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en 2013, determinaba que:

- La existencia de las Emisoras de Servicio Público está protegida por el Artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (ECHR, 2010). Tal protección es consecuencia de la decisión deliberada de los Estados para establecer un sistema público de emisoras.
- Toda interferencia por parte de las autoridades públicas contra la libertad de los medios debe ser justificada de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 10 del Convenio CEDH.
- Las medidas tomadas en contra de los medios del servicio público, incluidas las restricciones presupuestarias o de financiación, deben ser consideradas como interferencias.
- Un Estado puede adaptar sus políticas mediáticas en respuesta al cambio de las situaciones sociales y de los desarrollos del mercado, y así reducir o alterar la posición de un servicio de emisión pública existente.

- Sin embargo, según los estándares europeos, el llamado «modelo europeo del audiovisual» se refiere al establecimiento de un servicio público de medios sostenible, independiente y plural.

Una reorganización de las emisoras de servicio público y/o la reducción de su apoyo estatal puede, en muchos casos, ser justificado bajo las condiciones del artículo 10§2 del Convenio CEDH (ECHR, 2010). De todas formas, las obligaciones positivas que emergen del artículo 10§1 compelen a los Estados a garantizar en todo momento un paisaje mediático formado de acuerdo con los principios de pluralidad y diversidad, tolerancia y amplitud de miras, así como considerando aquellos principios referidos a la independencia y a la imparcialidad de la información (ECHR, 2010).

Aun así, el Artículo 10 del Convenio CEDH dice algo más que simplemente «el estado puede decidir» sobre si establecer un servicio público de emisoras, o no. Protege legalmente al servicio público de medios existente contra las acciones del Estado que sean arbitrarias o desproporcionadas, relativas a las intenciones legitimadas que un estado pudiera perseguir, y obliga al Estado a (re)establecer un sistema de medios de acuerdo con los requerimientos generales del Artículo 10 del Convenio (ECHR, 2010):

«Las disposiciones del Tratado que establece la Comunidad Europea se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público».

ERT ha sufrido varios intentos de reestructuración. Más allá de las particularidades que diferencian ERT y RTVE, los gobiernos han visto los medios públicos como sus instrumentos. En los dos años anteriores al cierre de ERT, el Director General de ERT, Emiliós Liatsis, nombrado por el Gobierno griego, ejerció una censura intensa y fue duramente criticado por estar rodeado de personal de administración sobrepagado (Reporters Without Borders, 2011). Durante ese mismo periodo, ha habido intentos gubernamentales de evitar que los periodistas escriban sobre aspectos importantes como la violencia policial, el impacto de la austeridad, incluyendo el despido de periodistas. El cierre de ERT, presentado como una solución contra «la corrupción crónica y la mala gestión» de la Corporación, en realidad contradecía varias cláusulas de la Constitución Griega así como el Tratado de Ámsterdam que se ocupa de las Emisoras de Servicio Público en Europa (Nevradakis, 2013). La Comisión

Europea declaró que no es su jurisdicción intervenir en aspectos nacionales y evitó de esta forma pedir la reinstauración de ERT (European Commission, 2013). A nivel interno, el Tribunal del Consejo de Estado griego ordenó al Gobierno reinstaurar ERT, pero el gobierno ignoró la sentencia.

6. PERSPECTIVAS DE FUTURO

En términos generales, la experiencia griega ha demostrado que el costo de una clausura de los *Public Service Media* (PSM) es elevado y no favorece los intereses de la sociedad. El hueco dejado solo podrá ser subsanado a un alto precio. Es responsabilidad de los PSM cumplir con los principios de universalidad de alcance y contenidos, así como su obligación especial de ampliar los horizontes culturales e intelectuales, que hacen su sustitución casi imposible. A pesar de los males que han sufrido los PSM históricamente, como un instrumento de propaganda e interferencia estatal y como el eslabón más débil en un ambiente competitivo de mercado, estos males derivan de estructuras y relaciones de dependencia que se establecen y mantienen a través del control de los recursos del PSM, incluyendo los recursos humanos. Nos encontramos probablemente en el umbral de otra fase de transformaciones fundamentales de la propiedad pública, esta vez en las estructuras de comunicación y sus recursos.

Los *Public Service Media* (PSM) constituyen uno de los pocos espacios públicos que quedan donde la lógica del mercado no es la lógica de operación única o dominante. Innovar la programación requiere tomar riesgos e incluso asumir un papel impopular, difícil y demandante. Tener un papel de líder intelectual en los medios, que empuja las fronteras sociales y obliga a la sociedad a estar despierta y alerta es algo difícil, que no encaja fácilmente con las presiones de tener ganancias y ser responsable con los socios. El papel del PSM, como se demuestra en los trabajos publicados en este libro, es complejo, exigente y a menudo requiere muchos recursos. Sin embargo, es importante recordar que los valores fundamentales del PSM son al mismo tiempo demandas políticas para la autoevaluación y mejoramiento continuo del PSM, pero también demandas dirigidas a las autoridades, que exigen políticas que protegen estos espacios.

«Servicio público» es la palabra clave como principio guía de las políticas para localidades y comunidades en Europa. «Servicio público» significa un esfuerzo consciente, sistemático y sostenido de abastecer a toda la sociedad. «Servicio público» e interés público son las dos caras de una misma moneda. Interés público significa, especialmente para sociedades

en crisis polifacéticas, priorizar políticas orientadas hacia los grupos de la sociedad más marginados y vulnerables. Los *Public Service Media* (PSM) deben servir a sus comunidades de forma plural y diversa, en cuanto se trata de comunidades fluidas y en constante cambio. Todos los medios, privados y públicos tienen la responsabilidad de ejercer como servicio público en algún grado.